



Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Distr. general
10 de octubre de 2006
Español
Original: inglés

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

Grupo de trabajo anterior al período de sesiones

37º período de sesiones

15 de enero a 2 de febrero de 2007

Respuestas a la lista de cuestiones y preguntas relativas al examen del sexto informe periódico

Grecia

Aspectos generales

1. El sexto informe periódico nacional no contiene información relativa a los artículos 13, 15 y 16 de la Convención porque no hay novedades de las que informar.

Constitución, legislación y mecanismos nacionales

2. I. El término “medidas positivas” utilizado en el párrafo 2 del artículo 116 de la Constitución de Grecia

El 6 de abril de 2001, el Parlamento de Grecia concluyó su revisión de la Constitución. Entre las enmiendas aprobadas figura la sustitución de una disposición que permitía ciertas excepciones al principio constitucional de igualdad entre los géneros por una disposición sobre medidas positivas. La enmienda fue aprobada por abrumadora mayoría (275 de los 280 votos). En consecuencia, el nuevo párrafo 2 del artículo 116 dice lo siguiente: “*Las medidas positivas para la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer no constituyen discriminación por motivo de género. El Estado tomará medidas para eliminar las desigualdades existentes en la práctica, en particular las que perjudiquen a las mujeres*”.

La enmienda es, en gran medida, el resultado de una larga campaña llevada a cabo por las organizaciones no gubernamentales de mujeres de Grecia. Concretamente, la Liga Helénica para los Derechos de la Mujer, en colaboración con la Fundación Marangopoulos para los Derechos Humanos y la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, organizó mesas redondas en las que participaron parlamentarios, magistrados de los tribunales superiores, académicos y juristas, las cuales recibieron amplia cobertura en los medios de información. La redacción del nuevo párrafo 2 del artículo 116 fue fruto de esa labor y, como coincidieron los expertos en su animado debate, se inspiró en el párrafo 1 del



artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la recomendación general 25 del Comité y el párrafo 4 del artículo 141 del Tratado de la Comunidad Europea, además del artículo 2 y el párrafo 2 del artículo 3 de dicho tratado.

II. Aplicación del párrafo 2 del artículo 116 de la Constitución de Grecia

El párrafo 2 del artículo 116 de la Constitución se aplica con medidas positivas específicas para mejorar la situación de las mujeres en diversos ámbitos, entre ellos el empleo y los centros decisorios, donde están insuficientemente representadas. Cabe destacar los siguientes ejemplos:

- La disposición legislativa que establece una cuota de participación en las listas electorales para provincias, municipios y comunidades de al menos un tercio tanto para hombres como para mujeres (véase más información en la pregunta 11);
- Los programas de la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, ejecutados en el contexto del tercer Marco Comunitario de Apoyo, que se dirigen exclusivamente a mujeres a) o establecen medidas positivas en su favor b):

a) El proyecto “Financiación de intervenciones integradas en favor de la mujer” forma parte del programa operacional “Empleo y formación profesional 2000-2006”. Consiste en la prestación de servicios mutuamente complementarios de información especializada, apoyo social y asesoramiento, formación preprofesional y profesional y empleo. Estas medidas se están aplicando en el periodo 2004-2007 en las 13 regiones del país, mediante 17 planes de acción, con un presupuesto de 13 millones de euros. Además, la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, en cooperación con la Agencia Estatal de Empleo, ha habilitado para este proyecto la suma de 30 millones de euros para facilitar la inmediata integración de las mujeres en el mercado de trabajo con medidas concretas para atender las necesidades especiales de las mujeres desempleadas, por ejemplo, subvenciones para crear nuevos puestos de trabajo, subsidios para nuevas trabajadoras autónomas y pasantías. Concretamente, se dispone que las subvenciones correspondientes a cada día de empleo de una mujer han de ser superiores a las correspondientes a otras categorías de desempleados beneficiarios del programa.

b) El proyecto “Medidas positivas en favor de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer en las pequeñas, medianas y grandes empresas” también forma parte del programa operacional “Empleo y formación profesional 2000-2006”, y tiene como objetivos la aplicación de medidas positivas en pro de la mujer dentro de la empresa, el logro de la participación igualitaria del hombre y la mujer en los puestos de responsabilidad y la promoción de los ascensos de mujeres dentro de la estructura jerárquica de la empresa. Veinte empresas participan en el primer ciclo de este proyecto, aún en curso, realizando actividades de capacitación, educación, asesoramiento y sensibilización por un costo total de 2.596.440 euros. En el segundo ciclo del proyecto (cuyo presupuesto total es de 14.300.000 euros), que se desarrollará en el periodo 2006-2008, la cuota de financiación privada se reducirá del 50% al 25% y, entre otras cosas, se

promoverá el teletrabajo, se abrirán nuevas guarderías y se ampliarán los sistemas de certificación de la calidad (ISO).

- En todos los programas ejecutados por la Agencia Estatal de Empleo se ha fijado una cuota obligatoria de participación de la mujer del 60%.
- El programa “Fomento de la capacidad empresarial de la mujer”, que forma parte del programa operacional “Competitividad” del Ministerio de Desarrollo, está orientado al desarrollo, el apoyo y la promoción de la actividad empresarial de mujeres de entre 21 y 55 años de edad interesadas en crear nuevas empresas pequeñas y microempresas, que sean viables, en los sectores de la elaboración de productos, el comercio, los servicios y el turismo.

3. I. Recursos legales contra las presuntas violaciones del principio de igualdad entre los géneros

a) *El control de la constitucionalidad de las leyes.* El principio constitucional de igualdad entre los géneros (párrafo 2 del artículo 4 y párrafo 2 del artículo 116) es una norma jurídica aplicable en todos los ámbitos y vinculante para las autoridades griegas. Todos los tribunales de Grecia examinan la constitucionalidad de las leyes aplicables a las causas de las que conocen y se abstienen de aplicar las disposiciones que consideran inconstitucionales (párrafo 4 del artículo 93 y párrafo 2 del artículo 87 de la Constitución). Los actos administrativos de aplicabilidad general (decretos y decisiones ministeriales) basados en disposiciones legales previas pueden ser anulados por el Consejo de Estado (Tribunal Supremo Administrativo) si se consideran contrarios a la ley en que se basan, la Constitución, el derecho comunitario europeo o los tratados u otros instrumentos internacionales que Grecia haya ratificado (entre ellos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer);

b) *El derecho al recurso judicial y, en general, a la protección jurídica.* La violación del principio de igualdad entre el hombre y la mujer, consagrado en la legislación, puede ser motivo de anulación de una sentencia y de que la víctima de discriminación ejerza su derecho de recurso. En Grecia, con arreglo al artículo 87 de la Constitución, la administración de justicia compete a los jueces de los tribunales civiles, penales y administrativos, que gozan de independencia personal y funcional;

La Ley No. 3488/2006, promulgada recientemente por el Parlamento, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato para hombres y mujeres en cuanto al acceso al empleo, la formación profesional y el desarrollo de la carrera, las condiciones de trabajo y otras disposiciones pertinentes, proporciona una protección jurídica mejor articulada a las víctimas de discriminación por motivo de género en el ámbito del empleo y las relaciones laborales (artículo 12). En concreto, todas las personas que se consideren agraviadas por no haber recibido un trato igualitario tienen derecho, incluso después de terminada la presunta relación discriminatoria, a recibir protección jurídica y a recurrir ante las autoridades competentes, incluido el Defensor del Pueblo, para hacer que se cumpla la ley;

c) *El derecho a iniciar procedimientos de mediación por conducto del Defensor del Pueblo.* Esta nueva ley, mencionada en el párrafo a) de la presente respuesta, dispone el nombramiento del Defensor del Pueblo de Grecia como autoridad independiente facultada para vigilar la aplicación del principio de igualdad de trato para hombres y mujeres en el empleo y las relaciones laborales, tanto en el sector privado como en el público, así como para mediar entre el

demandante y el presunto infractor de este principio. Para el examen de las demandas relativas al sector privado, se prevé la cooperación entre el Defensor del Pueblo y el Organismo de Inspección de Trabajo;

d) *El derecho de las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos a recurrir e intervenir en favor de la víctima.* Los sindicatos, otras entidades jurídicas y las asociaciones de personas (organizaciones no gubernamentales) con un interés legítimo, pueden, en función de sus fines específicos, recurrir ante las autoridades independientes o administrativas competentes en nombre de la víctima o intervenir en su defensa, siempre que cuenten con su consentimiento. También pueden intervenir en favor de la víctima ante un tribunal. Se reconocen estos derechos en los casos en que se haya vulnerado el principio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el empleo y las relaciones laborales;

e) *El derecho a obtener información y asesoramiento jurídicos.* Aparte del derecho a recurrir, las mujeres que hayan recibido, en cualquier ámbito de la vida, un trato considerado discriminatorio por razón de género según la legislación nacional, europea o internacional tienen a su disposición un servicio estatal de información, apoyo e intervención jurídicos. Concretamente, pueden acudir a la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros (Ley No. 1558/1985), el Centro de Investigación para la Igualdad entre los Géneros (Ley No. 2266/1994), el Departamento de Igualdad entre los Géneros del Ministerio de Trabajo y los órganos locales de inspección de trabajo.

II. Procesos judiciales

En lo que respecta a la jurisprudencia griega, el Consejo de Estado, en respuesta al recurso presentado por un grupo de mujeres afectadas, ha emitido una serie de decisiones (véanse, entre otras, StE 2905-9/2003, StE 1986-90/2005, sobre la fijación de una cuota del 10% para la contratación de mujeres en la Guardia Fronteriza) en las que deja claro que la imposición de una cuota desfavorable para las mujeres contraviene lo dispuesto en el artículo 4 y el párrafo 2 del artículo 116 de la Constitución.

III. Recursos administrativos y de otro tipo

El Ministerio de Defensa Nacional ha acatado la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como el nuevo párrafo 2 del artículo 116 de la Constitución, que mediante la Ley No. 2913/2001 obliga a garantizar la plena igualdad entre los hombres y mujeres candidatos a las academias militares para oficiales superiores y suboficiales de las fuerzas armadas. Además, la Ley No. 3103/2003 abolió la cuota que existía para la admisión de mujeres a las academias de policía; la Ley No. 3113/2003 abolió una serie de disposiciones similares relativas a la contratación de mujeres para la Guardia Fronteriza; y la Ley No. 3387/2005 abolió la cuota del 10% para el ingreso de mujeres en la academia de bomberos. La Ley No. 3448/2006 abolió la cuota del 15% para la contratación de mujeres por los servicios de policía municipal, además de regular la contratación por dicho cuerpo de personas respecto de las cuales exista un fallo de nulidad con fuerza de cosa juzgada dictado por un tribunal administrativo.

4. Actualmente, pasados dos años desde la proclamación de las Prioridades Políticas y Ejes de Acción Nacionales para la Igualdad entre los Géneros 2004-2008, estimamos que se ha ejecutado más del 80% del programa. Más concretamente, la

aplicación por parte del Gobierno actual de un enfoque integrado de los asuntos de igualdad entre los géneros ha logrado lo siguiente:

- Vincular las cuestiones de igualdad entre los géneros a las prioridades nacionales de Grecia (desarrollo, empleo, educación y cohesión social);
- Destacar su función como motor del crecimiento económico y la competitividad en la economía y la empresa;
- Hacer resaltar su dimensión europea e internacional en el plano nacional;
- Promover instrumentos modernos para el fomento de la igualdad entre los géneros, como el diálogo social, la participación de las empresas y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Ha habido una importante labor de creación de infraestructuras, en cooperación con las asociaciones patronales, empresas y organizaciones no gubernamentales, que ha dado lugar a la firma de protocolos y memorandos de cooperación sobre una variedad de cuestiones (véanse las preguntas 23 y 24). También se les pudo presentar bastante información actualizada y se obtuvo su apoyo para varias iniciativas legislativas importantes y otras actividades del Estado;
- Establecer nuevos mecanismos para su promoción, como el Comité Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (véase la pregunta 5) y el Departamento de Igualdad entre los Géneros que se va a crear en la Oficina del Defensor del Pueblo. La designación del Defensor del Pueblo como uno de los órganos para la igualdad entre los géneros constituye una novedad importante. El Defensor del Pueblo está facultado para vigilar la aplicación del principio de igualdad de trato para hombres y mujeres en el empleo y las relaciones laborales en el sector público y, por primera vez, en el privado (en virtud de la Ley No. 3488/2006 de incorporación de la directiva 73/2002/EC de la Unión Europea);
- Establecer un nuevo enfoque y mentalidad dinámicos e innovadores en lo que respecta a la igualdad entre los géneros en la sociedad griega;
- Promover simultáneamente, por primera vez, una serie de proyectos de ley importantes para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer (Ley No. 3386/2005 sobre la expedición de permisos de residencia y trabajo a las víctimas de la trata de personas, Ley No. 3488/2006 sobre la protección contra el acoso sexual en el acceso al empleo y en el lugar de trabajo, proyecto de ley de lucha contra la violencia doméstica), y para fomentar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el empleo y las relaciones laborales.

5. El artículo 8 de la nueva Ley de regulación de los asuntos relativos al Centro Nacional para la Administración Pública y el Gobierno Local y otros asuntos de la competencia del Ministerio de Interior, Administración Pública y Descentralización, sometida a votación en el Parlamento el 19 de septiembre de 2006 (y a la que todavía no se le ha asignado número), establece un Comité Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres como foro permanente para el diálogo social y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. El Comité Nacional está presidido por el Ministro de Interior, Administración Pública y Descentralización, cuyo suplente, en caso de necesidad, es el Secretario General para la Igualdad entre los Géneros, que también es miembro del Comité, junto con los Secretarios

Generales de los ministerios competentes, los representantes de las instituciones de gobierno local de primer y segundo nivel, los representantes del Consejo Económico y Social, los interlocutores sociales (patronales y sindicatos), las organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito de la igualdad entre los géneros, y varios expertos independientes.

El Comité tiene por objetivo contribuir a la elaboración de una estrategia nacional para la igualdad entre hombres y mujeres, la formulación de las políticas y medidas necesarias y la vigilancia de su aplicación y evaluación de sus efectos. Las dependencias administrativas de la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros se encargan de prestar apoyo administrativo, científico y técnico al Comité.

6. La Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, dependencia orgánica del Ministerio de Interior, Administración Pública y Descentralización, constituye el mecanismo nacional u órgano gubernamental encargado de la igualdad entre los géneros y, como tal, se ocupa de formular las políticas y medidas pertinentes en todos los sectores y ámbitos y vigilar su aplicación.

La Comisión Parlamentaria para la Igualdad y los Derechos Humanos es una comisión especial permanente del Parlamento de Grecia, cuya función consiste en preparar propuestas para procurar la mejor aplicación posible del principio de igualdad entre los géneros y la protección de los derechos humanos por la administración pública. La Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros es convocada regularmente a audiencias ante la Comisión Parlamentaria Especial, en las que le informa sobre la marcha de sus trabajos.

La Oficina para la Igualdad entre los Géneros es una dependencia orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, y está facultada para formular propuestas y promover las medidas necesarias para aplicar el principio de igualdad entre los géneros en las fuerzas armadas. La Oficina coopera con la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros.

El Comité Interministerial para la Igualdad entre los Géneros es el órgano facultado para coordinar a los ministerios y otras entidades estatales a fin de que incorporen la perspectiva de género en su labor general. Es una institución gubernamental en la que participa la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros.

El recién creado Comité Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres es la institución estatal que coordina y dirige el diálogo con los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales, de forma que su opinión se toma en cuenta sistemáticamente a la hora de formular la estrategia nacional para la igualdad entre los géneros. La responsabilidad respecto del funcionamiento del Comité recae en la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros.

Finalmente, las instituciones arriba mencionadas se complementan unas a otras tanto en el Gobierno como en el Parlamento, así como en los procesos de consulta social, para difundir toda la dimensión de la igualdad entre los géneros. El papel de la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros es fundamental, dado que ésta trata de asegurar una comunicación constante entre estas instituciones, informarles de la marcha de sus trabajos y de la evaluación de la aplicación de diversas políticas y medidas pertinentes y promover la plena participación y el fortalecimiento de dichas instituciones.

Estereotipos y educación

7. En el período que se examina (2001-2004), se ha logrado cambiar los estereotipos relacionados con los papeles y responsabilidades de las mujeres, las niñas y los niños en el contexto de la familia, y de la sociedad en general, mediante la ejecución de programas especiales, algunos de ellos dirigidos específicamente a los varones adultos y menores.

Uno de los programas que ejecuta actualmente el Centro de Investigación para la Igualdad entre los Géneros (KETHI) se titula “Sensibilización de los maestros y programas de intervención para promover la igualdad entre los géneros”. Dicho programa forma parte del programa operacional “Educación y Formación Profesional Inicial” (EPEAEK), se ejecutará (al menos hasta el año 2008) en las 13 regiones del territorio nacional, tiene por objeto promover la igualdad entre los géneros en las instituciones de enseñanza secundaria y formación profesional inicial, y está dirigido a maestros de educación general y tecnológica y de formación profesional inicial en las escuelas públicas. Por lo tanto, entre los destinatarios del proyecto figuran los maestros varones, de quienes se espera que aprovechen su experiencia en dichos programas de capacitación para examinar y cambiar su propio concepto de los papeles y responsabilidades de los dos sexos, y que preparen después sus programas de estudios de forma que puedan inspirar nuevas actitudes, o cambiar las antiguas si es necesario, entre sus alumnos varones (especialmente en la educación general y tecnológica y la formación profesional inicial).

Durante el período de enero a junio de 2006, se ejecutaron 13 programas de formación (en todas las regiones del país), y 156 programas de intervención en los que participaron 859 escuelas, 1.589 maestros y 14.451 alumnos (dado que los destinatarios de estos programas de intervención son los maestros y estudiantes varones)¹.

El Centro de Investigación para la Igualdad entre los Géneros (KETHI) es también el órgano que coordina el proyecto “Socios igualitarios: reconsideración del papel de los hombres en el trabajo y la vida privada”, ejecutado como parte del Quinto programa de acción comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de la Comisión Europea. Dicho proyecto también se ejecuta en Grecia, y los grupos destinatarios son, entre otros, los niños en edad preescolar, los adolescentes, los hombres en general y los padres en particular. Como grupo destinatario, los hombres y padres recibirán información sobre cuestiones relacionadas con la igualdad, debatirán sobre la conciliación de la vida laboral y las obligaciones familiares y tratarán de redefinir sus percepciones sobre el papel del padre.

También como parte del Quinto programa de acción comunitaria a medio plazo de la Comisión Europea, se ejecuta en Grecia el proyecto “Igualdad entre los géneros: responsabilidad de ambos sexos”, en el cual participa el KETHI. Entre los destinatarios de este proyecto figuran los hombres y los padres, a quienes se invita a ponerse al día y cobrar conciencia de la necesidad y utilidad de participar ellos también en la promoción de la igualdad entre los sexos.

¹ Este proyecto se menciona aquí porque también está dirigido a los maestros y estudiantes varones. El mismo proyecto se menciona más abajo, en la unidad relativa al punto 9 (promoción de la igualdad en la educación escolar y la educación permanente).

Los estereotipos de género son especialmente patentes dentro de la familia. Para cambiar la mentalidad de los padres (sobre todo de los hombres), se está ejecutando en toda Grecia programas de formación en las llamadas “Escuelas para Padres”, que comenzaron a establecerse en 2003 y constituyen una estructura separada de aprendizaje permanente con el apoyo del Instituto de Educación Permanente de Adultos (IDEKE), dependiente de la Secretaría General para la Educación de Adultos (GGEE). En el período entre 2003 y 2006 se establecieron 54 escuelas para padres en todas las regiones del país².

8. Como ya se ha mencionado, en el período que se examina se emitió el Decreto Presidencial 77/2003 relativo a la radiotelevisión, que prohíbe (véase el párrafo 1 del artículo 4) presentar a una persona de forma que se incite al público a su degradación, exclusión social o discriminación desfavorable por razón de género, raza, nacionalidad, idioma, religión, ideología, edad, enfermedad o discapacidad, orientación sexual o profesión.

En 2002, por iniciativa de la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, se creó, en cooperación con el Instituto para la Promoción del Periodismo, Athan. V. Botsi, un premio anual de reconocimiento de un artículo, reportaje o investigación periodística que resalte y promueva la cuestión de la igualdad. El galardón lo patrocina la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros y su objetivo es promover el desarrollo cualitativo y la publicidad de las cuestiones relacionadas con la mujer, así como señalar los nuevos papeles sociales de ambos sexos y su igualdad social.

En el período entre 2002 y 2004, en el contexto de la iniciativa EQUAL, varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales participaron juntas en el proyecto “DREAM-Combatir el racismo y la xenofobia en los medios de difusión”, cuyo objetivo era luchar contra todas las formas de discriminación de cualquier grupo social, teniendo siempre como elemento central la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

9. Una de las medidas coordinadas para luchar contra la discriminación y asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la enseñanza es la que se menciona más arriba, en el punto 7, es decir, el proyecto “Sensibilización de los maestros y programas de intervención para promover la igualdad entre los géneros”, ejecutado en todo el país por el Centro de Investigación para la Igualdad entre los Géneros (KETHI), cuyo objetivo es promover la igualdad entre los géneros en la enseñanza secundaria y la formación profesional inicial. Además, el KETHI, en cooperación con la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, ejecuta el programa “Observatorio para la vigilancia y evaluación de las medidas políticas en materia de igualdad entre los géneros en todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional inicial”.

En cuanto a la promoción de la igualdad entre los géneros en el aprendizaje permanente, las “Escuelas de Segunda Oportunidad” llevan funcionando desde 2000 en toda Grecia, ofreciendo a los ciudadanos de más de 18 años de edad, independientemente de su sexo, la oportunidad de terminar sus estudios del nivel mínimo obligatorio de la enseñanza secundaria y obtener el correspondiente

² Dado que las escuelas para padres tratan asuntos relacionados con el entorno familiar y escolar, es decir, también tienen que ver con la educación escolar, se mencionan también más abajo, en la unidad relativa al punto 9.

certificado de equivalencia. En el período 2000-2006 se establecieron y entraron en funcionamiento 43 Escuelas de Segunda Oportunidad en todas las regiones del país. Estas escuelas reciben el apoyo del Instituto de la Educación de Adultos (IDEKE), perteneciente a la Secretaría General para la Educación de Adultos (GGEE) que, a su vez, depende del Ministerio de Educación Nacional y Asuntos Religiosos.

La promoción del aprendizaje permanente se sustenta también en el funcionamiento de los Centros de Educación de Adultos (KEE), otro órgano apoyado por el IDEKE. Los Centros de Educación de Adultos funcionan desde 2003 en todo el país, y tanto a ellos como a las Escuelas de Segunda Oportunidad asisten ciudadanos mayores de 18 años de edad. El hecho de que se tuvieran en cuenta tanto el criterio del género como el de la identidad social para elaborar los programas educativos pertinentes es significativo: se pretende que en los programas de los Centros de Educación de Adultos participe todo el mundo, independientemente del sexo, y en particular los grupos sociales más vulnerables, con características económicas, sociales y educativas especiales (romaníes, presos, musulmanes³). En el período 2003-2006 se establecieron y entraron en funcionamiento 43 Centros de Educación de Adultos en todas las regiones del país.

El Estado griego considera muy importante el sistema de educación permanente, entre otras cosas, debido a la participación en éste de un número cada vez mayor de ciudadanos de diversas edades y niveles socioeconómicos y educativos. Según los datos de la Secretaría General para la Educación de Adultos, el número de participantes en programas de educación permanente aumentó un 82,6% en el curso escolar 2004-2005 (en comparación con el curso anterior).

10. I. Información sobre la proporción de mujeres docentes en las instituciones de enseñanza superior

En el cuadro 1, que figura en el anexo 3, se presentan datos estadísticos (obtenidos del Departamento de Investigación y Estadísticas Empresariales del Ministerio de Educación Nacional y Asuntos Religiosos) que ofrecen una idea aproximada del grado en que las mujeres han ingresado en los cuatro niveles (profesor titular, profesor asociado, profesor adjunto y conferencista) de la plantilla de docentes científicos de las instituciones de enseñanza superior. En el cuadro 2, del anexo 3 se presentan datos sobre el personal docente femenino en los institutos de educación tecnológica.

De los datos presentados se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- La proporción de mujeres en la plantilla de docentes científicos de las instituciones de enseñanza superior oscila entre el 25% y el 30%;
- La tendencia al alza en cuanto a la proporción de mujeres en la plantilla de docentes científicos de las instituciones de enseñanza superior es un dato alentador: en el curso 2000-2001, las mujeres ocupaban el 25,83% de las plazas de docente (2.045 de un total de 7.917), en 2001-2002, esta cifra aumentó al 26,68% (2.144 de un total de 8.035), en 2002-2003, aumentó al

³ Los Centros de Educación de Adultos, como institución de educación permanente que atiende, entre otros, a mujeres romaníes y musulmanas, facilitándoles enseñanza, capacitación y, por tanto, la posibilidad de mejorar su situación en el mercado laboral, también se mencionan en las unidades relativas a los puntos 27 (mujeres romaníes) y 28 (mujeres musulmanas).

27,22% (2.326 de un total de 8.545), y en 2003-2004, aumentó al 28,18% (2.433 de un total de 8.633);

- Esta tendencia general al alza obedece a las tendencias parciales registradas en casi todos los niveles de la plantilla de docentes científicos de las instituciones de enseñanza superior (con la posible excepción de las profesoras adjuntas):

Niveles	Años			
	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
Profesoras titulares	266	296↑	318↑	341↑
Profesoras asociadas	477	506↑	576↑	625↑
Profesoras adjuntas	767	759↓	789↑	758↓
Conferencistas	535	583↑	643↑	709↑

Aunque en 2003-2004 se observa un aumento del número de mujeres en todos los niveles, la proporción de mujeres docentes en la enseñanza de nivel superior sigue siendo baja, salvo en los puestos de profesora adjunta. Entre los motivos principales cabe destacar:

- El bajo número de mujeres que han presentado tesis doctorales en las últimas décadas (años setenta y ochenta);
- La dificultad que tiene la mujer para conciliar la vida laboral y la personal, hecho que suele constituir un factor perjudicial para su carrera profesional⁴;
- La falta de redes científicas de mujeres, o su ineficiente funcionamiento, y el difícil acceso de las mujeres a las redes científicas dominadas por los hombres⁵;
- La inexistencia de un sistema de cuotas que facilite el aumento del número de mujeres en puestos científicos y una distribución más justa de los puestos entre ambos sexos⁶.

II. Representación de las mujeres romaníes e inmigrantes en la enseñanza superior

Por el momento no hay datos estadísticos, ni oficiales ni extraoficiales, acerca del número de mujeres romaníes e inmigrantes que participan en la enseñanza superior, ya sea como alumnas o como docentes. La pertenencia a la etnia romaní y la condición de inmigrante constituyen datos personales que están protegidos por ley. Por otra parte, una de las prioridades del Estado griego es hoy el ingreso de los romaníes, especialmente de las mujeres, en la enseñanza primaria y secundaria, ya que la educación general les permitirá integrarse adecuadamente en la sociedad griega.

⁴ Véase Universidad Nacional y Universidad Kapodistria de Atenas, programa de estudios de licenciatura sobre el género y la igualdad, grupo de trabajo de Lydiá Vaiou y Stella Vosniadou, *Organisations, Actions and Programmes on Promoting Gender Equality among the Scientific Staff of Universities*, No. 1, 20/11/2004.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Participación de la mujer en la vida pública y los procesos decisorios

11. El nuevo Código Municipal y Comunitario, que entró en vigor en junio de 2006, conserva (artículo 34, párr. 3) la disposición de la Ley No. 2910/2001, ya derogada, sobre la cuota de participación para ambos sexos de al menos un tercio del total de candidatos en las elecciones municipales y provinciales. El Ministerio de Interior, Administración Pública y Descentralización, por conducto de la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, se ocupa de que esta disposición se aplique debidamente con miras a las próximas elecciones municipales y provinciales, que tendrán lugar el 15 de octubre de 2006. Al mismo tiempo, la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros está llevando a cabo un proyecto de información pública e información dirigida específicamente a las mujeres cuyo objetivo es elaborar estrategias de comunicación para las mujeres candidatas a fin de reforzar su participación en las elecciones de octubre de 2006. El proyecto entraña las siguientes medidas:

- Publicación en junio de 2006 de una circular sobre la celebración de las elecciones del 15 de octubre y la forma de presentar las candidaturas, con una cuota mínima de un tercio asignada a cada sexo, que incluye ejemplos prácticos. Esta circular aparece en el sitio web de la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros (<http://www.isotita.gr>);
- Información a las mujeres candidatas sobre el marco institucional, en particular sobre las cuotas favorables a las mujeres, y sobre su función en la práctica, así como sobre estrategias de comunicación útiles, con un seminario especial organizado en cooperación con el Centro Nacional para la Administración Pública y el Gobierno Local (EKDDA), el 14 de septiembre de 2006;
- Amplia distribución del Manual del Capacitador: “Técnicas de comunicación para la mujer en la política” (Publicación del Centro de Investigación para la Igualdad entre Géneros 2005);
- Campaña televisiva nacional y distribución de material impreso con el lema “Algo falta”, en referencia a la escasa representación de las mujeres en la política;
- Programa de comunicación especial para las mujeres candidatas a cargos públicos locales, en el marco de un programa más amplio de información sobre las elecciones, ejecutado con el apoyo de la Sociedad Helénica para el Desarrollo y el Gobierno Locales.

El objetivo de las actividades mencionadas, que se realizan ya de forma sistemática y organizada, es educar a las mujeres sobre la necesidad de que haya igualdad de representación entre los sexos en las instituciones de gobierno local. También se pretende animar a las mujeres a presentarse a cargos electivos. El resultado previsto del programa es aumentar el número de mujeres candidatas y reforzar el apoyo electoral recibido por ellas, con la contribución de la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros. La idea de que la imposición de cuotas constituye un instrumento positivo necesario para mejorar la participación de las mujeres en las listas electorales es el mensaje principal del programa, que depende siempre de que se aplique debidamente la disposición legislativa por la que se fijan dichas cuotas.

12. Según datos recientes del Ministerio de Justicia, la representación de las mujeres en los puestos judiciales de máxima responsabilidad es la siguiente:

- a) 5 magistradas del Tribunal Supremo (de un total de 55 magistradas);
- b) 13 presidentas de tribunales de apelación (de un total de 95);
- c) 175 juezas de tribunales de apelación (de un total de 394);
- d) 2 mujeres fiscales en tribunales de apelación (de un total de 39);
- e) 25 mujeres fiscales adjuntas en tribunales de apelación (de un total de 104).

Los ascensos de los jueces se rigen por la disposición del Código Constitucional de los Tribunales de Justicia y el Estatuto del Personal de la Judicatura (Ley No. 1756/88), y no se establecen límites ni requisitos por razón de género. La única condición para obtener un ascenso es la referente al período de antigüedad.

Los licenciados en derecho sólo pueden ejercer como jueces después de haber aprobado un curso en la Escuela Nacional de la Judicatura, a la que ingresan únicamente aquellos candidatos que hayan aprobado primero una serie de exámenes especiales. En los últimos años se ha observado que el número de alumnas en dicha escuela ha aumentado a más del doble que el número de alumnos. Cabe deducir que la representación insuficiente de las mujeres, que hoy sólo existe en los cargos judiciales de máxima responsabilidad, desaparecerá probablemente en los próximos años.

Violencia contra la mujer

13. El Ministerio de Justicia, tras un proceso de cooperación con la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros y de consulta social, ha presentado al Parlamento un proyecto de ley sobre la lucha contra la violencia doméstica, entre otras disposiciones, que ya ha sido aprobado por la comisión parlamentaria competente y presentado al Parlamento para su examen en sesión plenaria. El proyecto de ley hace referencia a las recomendaciones pertinentes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y a las del Consejo de Europa.

El proyecto de ley sobre la lucha contra la violencia doméstica introduce cuatro reformas cruciales:

- a) Siguiendo el ejemplo de la legislación en vigor en otros Estados miembros de la Unión Europea, se tipifica como delito la violación en el matrimonio, es decir, las relaciones sexuales sin el consentimiento de ambos cónyuges;
- b) Se prohíbe expresamente el ejercicio de la violencia física contra un menor como medida disciplinaria durante su crianza, acatándose de esta forma las recomendaciones del Consejo de Europa y el Comité de los Derechos del Niño;
- c) Se introduce la mediación en las causas penales, ejecutándose así la decisión marco del Consejo Europeo, de marzo de 2001, relativa a los delitos de violencia doméstica. La víctima y el delincuente comparecen ante el fiscal competente para tratar de restablecer sus relaciones. Cuando la mujer víctima no desea participar en un proceso de mediación y el delincuente no asume su

responsabilidad legal, se reanuda el procedimiento penal normal (es decir, se procede a un juicio);

d) Estas disposiciones se aplican también a las parejas heterosexuales no casadas.

El proyecto de ley mencionado prevé sanciones más estrictas para una serie de actos que ya son sancionables según el Código Penal, cuando éstos se cometen en el contexto de la violencia doméstica. En particular, los siguientes delitos se sancionan con penas más duras: a) infligir heridas físicas o traumas físicos o mentales graves mediante un trato abusivo; b) infligir heridas físicas o dañar la salud de un familiar; y c) someter a la víctima a violencia doméstica o amenazarla para obligarla a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto, o permitir que se ejerza dicha violencia. Se prevé el enjuiciamiento automático de los que hayan cometido estos delitos, así como la aplicación obligatoria del procedimiento *in flagrante delicto*. Además, el proyecto de ley mencionado introduce las siguientes novedades:

- Se imponen penas especialmente severas a los que cometen actos de violencia doméstica en presencia de un menor, contra una mujer embarazada o contra personas que no puedan defenderse (por ejemplo, discapacitados o ancianos);
- Se imponen penas severas cuando la víctima es un menor y cuando se considere que deliberadamente se ha infligido un dolor físico intenso, provocado un agotamiento físico peligroso para la salud o causado un trauma psíquico potencialmente grave, especialmente mediante el confinamiento de la víctima;
- La violencia doméstica se considera motivo de presunción refutable de la disolución del matrimonio;

Para la protección, asistencia y apoyo a las víctimas de violencia doméstica, el proyecto de ley prevé lo siguiente:

- La obligación de la policía de informar a la víctima de los servicios de apoyo social que ofrecen los organismos oficiales estatales y locales;
- La obligación de los maestros de enseñanza primaria y secundaria, así como de los directores de centros de enseñanza preescolar, de informar inmediatamente a las autoridades fiscales y policiales de cualquier indicio de que un alumno está siendo físicamente maltratado por un familiar;
- La posibilidad de que los tribunales impongan ciertas condiciones restrictivas, como la inmediata expulsión del agresor del hogar, con el fin de proteger a la víctima y los demás miembros de la familia;

En cuanto a las estructuras de apoyo:

- Actualmente, se presta asistencia a las víctimas de violencia doméstica tanto en los dos Centros de Asesoramiento (en Atenas y El Pireo) de la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, como en los cinco Centros de Asesoramiento del Centro de Investigación para la Igualdad entre los Géneros (KETHI), que ya funcionan en Atenas, Salónica, Patras, Volos e Irakleio (Creta) y en los que se ofrecen asesoramiento y apoyo psicológico y jurídico. Por otra parte, en el futuro inmediato se abrirán otros cuatro Centros de Asesoramiento del KETHI en Anfisa, Preveza, Kalamata y Komotini, con el fin de seguir avanzando en la descentralización de las medidas pertinentes;

- El nuevo Código municipal y comunitario (Ley No. 3463/2006) estipula en el párrafo 2 del artículo 75 I e que compete a los municipios y comunidades prestar servicios de asesoramiento y apoyo a las víctimas de violencia doméstica;
- En el contexto de la elaboración de un nuevo Código de Administración Provincial, se ha propuesto una nueva disposición relativa a la posible creación de alianzas entre las administraciones provinciales y diversas organizaciones sin ánimo de lucro, para establecer albergues de acogida y alojamiento temporal de las víctimas de violencia doméstica.

Por último, cabe subrayar el interés especial con que trata el Estado griego la cuestión de la violencia contra la mujer en el plano internacional, demostrado, entre otras cosas, por su contribución voluntaria de 12.650 euros a la División para el Adelanto de la Mujer para la preparación del estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

14. En el contexto del segundo ciclo de la iniciativa EQUAL, financiada conjuntamente por el Fondo Social Europeo y el Estado griego, se está ejecutando a nivel nacional el proyecto “Apoyo integrado para la reincorporación social y laboral de las mujeres maltratadas desempleadas”, que cuenta con un presupuesto total de 1.220.000 euros. Las mujeres víctimas de violencia doméstica, así como las mujeres romaníes y de la etnia pomak que sufren unas duras condiciones de vida, son las destinatarias del proyecto.

15. El Parlamento de Grecia ha aprobado recientemente la Ley No. 3488 (Gaceta Oficial de Grecia F.E.K. 191A/11.9.2006), relativa a la Aplicación del principio de igualdad de trato de hombres y mujeres en cuanto al acceso al empleo, la formación profesional y los ascensos y las condiciones laborales. Esta nueva ley ha sido recibida con gran aceptación por los interlocutores sociales⁷, el Consejo Económico y Social⁸ y la Comisión Nacional de Derechos Humanos⁹.

La Ley No. 3488/2006 incorpora la directiva 73/2002 de la Comunidad Europea al ordenamiento jurídico nacional y aplica las recomendaciones pertinentes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y del Consejo de Europa.

El artículo 3 de la Ley No. 3488/2006 define los conceptos de discriminación directa e indirecta, acoso y acoso sexual, subsanando así una importante laguna en la legislación griega. Concretamente, cabe señalar que se trata de la primera vez que se define en la legislación griega el concepto de acoso sexual, que se considera específicamente como una forma de discriminación por razón de género en el lugar de trabajo y se prohíbe tanto en relación con el acceso al empleo como en cuanto a los ascensos y a la terminación del empleo.

Esta ley prevé medidas de protección de los trabajadores contra el despido basado en una actitud de venganza por parte del empleador ante un empleado que no

⁷ Véanse las opiniones de la Confederación General del Trabajo de Grecia (GSEE), la Federación de Industrias Griegas (SEV) y la Confederación Nacional de Comercio (ESEE) expresadas en una audiencia celebrada ante la comisión parlamentaria competente en la materia.

⁸ Véase la Opinión No. 156/2006 del Consejo Económico y Social.

⁹ Véanse las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentadas en su sesión plenaria, que se celebró el 22 de junio de 2006.

ha cedido al acoso sexual o de otro tipo. También se establece la protección contra el despido de los empleados que hayan testificado ante un tribunal u otra autoridad competente sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley. En el artículo 17 de la Ley No. 3488 se prevé una inversión parcial de la carga de prueba, con el fin de ofrecer mejor protección a la víctima de discriminación por razón de género, de forma que el acoso sexual se considera igual de grave que otras formas de acoso. En lo que se refiere a las sanciones, el acoso sexual se puede castigar con medidas civiles, administrativas, disciplinarias y penales. En particular, en el aspecto penal, se prevén penas privativas de libertad sumamente estrictas, de entre seis meses y tres años, así como multas de entre 1.000 y 30.000 euros.

Cabe señalar que el ámbito de aplicación de esta ley es muy amplio, e incluye a todos los candidatos a un empleo, los trabajadores con contratos privados, ya sean de plazo fijo o indefinido, y los empleados con contrato de obras o de servicios independientes, tanto en el sector público como en el privado, con independencia del tamaño de la empresa. La ley se aplica incluso cuando la persona no tiene contrato de trabajo, siempre que exista una relación laboral. También se aplica a los funcionarios de la administración pública, así como a los trabajadores del sector marítimo y de la agricultura, a quienes se aplican disposiciones especiales además de la legislación laboral común. Además, la ley se aplica a personas que estén recibiendo formación profesional para poder acceder a un trabajo o que sean candidatas a programas de formación profesional de cualquier tipo. El ámbito de aplicación de esta ley también incluye a las profesiones liberales y las entidades competentes para certificar la aptitud profesional para el ejercicio de una profesión o actividad económica.

Tráfico ilícito y trata de personas

16. Mejora y optimización del marco jurídico relativo a la asistencia a las víctimas del tráfico ilícito y de la trata de personas.

La mejora y la optimización del marco jurídico relativo a la asistencia a las víctimas del tráfico ilícito y de la trata de personas se han logrado con la promulgación de la Ley No. 3386/2005 sobre la entrada, residencia e inclusión social de nacionales de terceros países en el territorio de Grecia (I), junto con otras medidas e iniciativas (II) que se detallan a continuación.

I. Ley No. 3386/2005

A. La Ley No. 3386/2005 (Gaceta Oficial de Grecia A 212) sobre la entrada, residencia e inclusión social de nacionales de terceros países en el territorio de Grecia define claramente a las víctimas de la trata de seres humanos como las personas que han sido víctimas de los delitos descritos en los artículos del Código Penal 323 y 323A (trata de seres humanos), 349 (proxenetismo), y 351 y 351A (intermediación con fines de prostitución), independientemente de la forma de entrada (legal o ilegal) en el país (apartado i) del artículo 1).

La adición del capítulo IX a la ley tiene como objetivo integrar la regulación sobre la protección y la asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos en el contexto de la lucha contra ese fenómeno y de conformidad con las orientaciones de la directiva 2004/81/EC del Consejo de Europa, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean

víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes.

Según lo dispuesto en el artículo 46, por orden del Fiscal del Tribunal de Primera Instancia, se expedirá un permiso de residencia, de manera totalmente gratuita, a cualquier nacional de un tercer país que haya sido considerado víctima de trata de seres humanos. La solicitud pertinente de expedición del permiso de residencia será presentada por el propio nacional del tercer país o bien será remitida por el fiscal competente a la Dirección de Extranjería e Inmigración del Ministerio de Interior, Administración Pública y Descentralización.

El artículo 47 regula la primera etapa del proceso, relativa a la información a la víctima sobre la posibilidad de que se le expida un permiso de residencia y las condiciones requeridas para ello. Se regulan en particular los casos de menores no acompañados que sean víctimas, estableciendo las medidas que deben tomar la policía o las autoridades judiciales competentes para averiguar la identidad y la nacionalidad de la víctima a fin de obtener pruebas demostrativas de que no está acompañada. De conformidad con esa disposición, se tomarán todas las medidas posibles para localizar a la familia del menor y, en caso necesario, velar por su representación jurídica en el contexto de posibles acciones judiciales.

El artículo 48 introduce el concepto del período de reflexión, es decir, un período de tiempo adecuado que se otorga a la víctima, por orden del fiscal competente, para que ésta se recupere y escape de la influencia de sus explotadores antes de decidir si está dispuesta a cooperar con la policía y las autoridades judiciales competentes. En concreto, el período de reflexión otorgado será de 30 días, que se prorrogará durante otros 30 días en caso de que la víctima sea menor de edad. Este período se considera adecuado para que las víctimas estudien los riesgos a los que se enfrentan y decidan si desean cooperar con las autoridades competentes. Se establece explícitamente que el tiempo considerado período de reflexión no se tendrá en cuenta a los efectos del derecho de residencia en el país. Durante ese período, la víctima no podrá ser deportada y se revocará toda decisión en vigor sobre su deportación. El período de reflexión podrá darse por terminado por orden de la autoridad fiscal competente en caso de que la víctima se reconcilie con los explotadores de la red de trata de personas. Además, durante todo el procedimiento, el Estado conserva el derecho a poner fin al período de reflexión por motivos de orden público y seguridad.

El artículo 49 establece medidas de tratamiento médico y asistencia a las víctimas de la trata durante el período de reflexión (tratamiento médico y farmacéutico, asistencia jurídica, etc.).

El artículo 50 establece las condiciones específicas para la expedición y la renovación del permiso de residencia a las víctimas de la trata de seres humanos. En concreto, indica que, cuando haya terminado el período de reflexión o antes de esa fecha (en el caso b) del presente párrafo), el fiscal competente elaborará un informe en que se indicará si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

- a) Se considera necesario prorrogar la estancia de la persona en cuestión en territorio de Grecia para facilitar la investigación o el procedimiento penal en curso;
- b) La persona en cuestión ha expresado explícitamente el deseo de cooperar;

c) La persona en cuestión ha roto toda relación con los presuntos autores de los delitos indicados en el apartado I del artículo 1 de la citada ley. Asimismo establece que, en caso de que el fiscal competente emita su opinión positiva y siempre y cuando existan motivos de orden público y seguridad, la solicitud se examinará de manera prioritaria; el permiso de residencia expedido por el Ministerio de Interior, Administración Pública y Descentralización tendrá una duración de 12 meses y podrá renovarse por un período de tiempo de igual duración y en las mismas condiciones que el permiso inicial.

El mismo artículo indica que las víctimas de la trata que hayan recibido el citado permiso de residencia tendrán derecho a acceder al mercado laboral así como al tratamiento médico y farmacéutico normal, a la formación profesional y a la educación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del decreto presidencial No. 233/2003.

El artículo 51 estipula que el permiso de residencia no se renovará, o bien se revocará, si se cumple una de las siguientes condiciones:

- a) El beneficiario se reconcilia activa y voluntariamente con los presuntos autores de los delitos denunciados por él;
- b) La autoridad competente considera que la cooperación o el informe de la víctima en contra de sus explotadores son fraudulentos o inadecuados;
- c) La víctima deja de cooperar;
- d) El procedimiento en cuestión queda interrumpido por iniciativa de la fiscalía o la autoridad judicial competente;
- e) Se ha dictado una sentencia judicial firme, por la que también se da por finalizado el procedimiento en cuestión.

Por último, el artículo 52 establece las condiciones bajo las cuales se podrá modificar el motivo que da lugar al derecho de residencia en el país. Concretamente, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la sentencia firme del tribunal, el titular del permiso de residencia otorgado por haber sido víctima de trata de seres humanos podrá recibir un permiso de residencia por cualquiera de los demás motivos establecidos por ley, de conformidad con las condiciones correspondientes, por decisión del Secretario General de la región de que se trate.

B. Ya se ha creado en el Ministerio de Justicia un comité de elaboración de legislación que trabaja en la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos facultativos, así como del Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos.

II. Medidas de apoyo a las víctimas, en el marco de la legislación vigente

A. Se ha creado un comité especial de elaboración de legislación, presidido por el Secretario General del Ministerio de Justicia, con el objetivo de coordinar a nivel político los procedimientos para la aplicación de las disposiciones de la Ley No. 3064/2002 sobre la lucha contra la trata de seres humanos. La labor del comité, que opera en el nivel de las Secretarías Generales de los Ministerios competentes (Ministerio de Interior, Administración Pública y Descentralización y Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación Nacional y Asuntos Religiosos,

Ministerio de Empleo y Protección Social, Ministerio de Sanidad y Solidaridad Social, Ministerio de Orden Público), ha dado como resultado la elaboración del Programa de medidas contra la trata de personas, que está basado en la coordinación de los ministerios competentes y abarca todo el abanico de medidas destinadas a luchar contra el tráfico ilícito de seres humanos, a saber:

- Vigilancia del fenómeno;
- Identificación y protección de las víctimas;
- Creación de albergues – centros de acogida;
- Asistencia médica y psicológica a las víctimas;
- Protección jurídica y asistencia letrada a las víctimas;
- Apoyo administrativo – concesión de permisos de residencia;
- Repatriación de las víctimas y asistencia en sus países de origen mediante programas de reintegración;
- Capacitación e integración en el mercado laboral de las víctimas que permanezcan en Grecia;
- Capacitación de los jueces, fiscales y agentes de policía;
- Información pública.

B. Aparte de los equipos de lucha contra la trata que operan en las Direcciones de Seguridad de la Policía de Grecia en Atenas y Salónica, ya se han establecido equipos similares en otras 12 Direcciones de Seguridad del país.

C. El 29 de noviembre de 2005, las secretarías de los ministerios competentes, miembros del comité especial mencionado en la subsección A de la sección II *supra*, 12 organizaciones no gubernamentales y la Organización Internacional para las Migraciones firmaron un Memorando de cooperación sobre la lucha contra la trata de seres humanos y la asistencia a las víctimas, cuyo objetivo es coordinar en el plano político los procedimientos para la aplicación de la Ley No. 3064/2002 en lo relativo a la protección. El Memorando de cooperación establece las condiciones generales para la cooperación entre el comité especial y las organizaciones no gubernamentales a fin de velar por la protección efectiva y la asistencia a las víctimas tal como se indica en los artículos 323 y 323A (trata de seres humanos), 349 (proxenetismo), 351 y 351A (intermediación con fines de prostitución) del Código Penal.

D. Periódicamente se celebran seminarios destinados a jueces y fiscales, agentes de policía y funcionarios de la salud relativos al proceso de clasificación y remisión que se aplicará a las víctimas, con la colaboración del Estado y, en particular, del Ministerio de Relaciones Exteriores (Asistencia Helénica), de organizaciones no gubernamentales y de otros agentes (como la Asociación de Fiscales, la Organización Internacional para las Migraciones o la Asociación Internacional de Policía).

E. Por iniciativa del Fiscal Jefe del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, los procedimientos relacionados con la trata se han asignado a fiscales especializados.

F. El Centro Nacional de Solidaridad Social (E.K.K.A.), entidad jurídica de derecho público supervisada por el Ministerio de Sanidad y Solidaridad Social:

- Gestiona tres albergues para el alojamiento temporal de víctimas de la trata (dos de ellos en Atenas y el tercero en Salónica) con capacidad para atender a 53 personas. Además, el Centro ha cedido dos de sus edificios a organizaciones no gubernamentales; esos edificios ya funcionan como albergues para el alojamiento temporal de las víctimas con un total de 30 camas;
- Ha ampliado el horario de funcionamiento de la línea telefónica de primeros auxilios sociales (197) a 24 horas al día. Esa línea telefónica tiene los siguientes usos:
 - Recepción de denuncias sobre retención ilegal y abusos;
 - Localización de víctimas de la trata;
 - Apoyo psicológico y social inmediato a las víctimas;
 - Enlace con centros de tratamiento médico y farmacéutico y para la hospitalización de las víctimas.
- Ha iniciado un servicio de intervención local y alojamiento temporal que funciona durante las 24 horas del día. Un equipo de personal especializado se desplaza en automóvil hasta el lugar donde se ha informado de una emergencia. El Ministerio de Salud y Solidaridad Social ha publicado una circular para informar y sensibilizar al personal de los servicios de salud y solidaridad social sobre los delitos de tráfico ilícito y trata de seres humanos.

G. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por mediación de Asistencia Helénica y en colaboración con organizaciones no gubernamentales y otros agentes, está ejecutando programas destinados a luchar contra la trata de personas mediante la prevención, la protección y la represión. Las medidas del Ministerio incluyen programas de detección y orientación, la gestión de albergues para el alojamiento y la asistencia psicológica y social de las víctimas, el apoyo jurídico y administrativo, la repatriación voluntaria, medidas en los países de origen, campañas informativas y de sensibilización pública y programas de capacitación de los agentes estatales competentes.

H. La Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, además de las otras medidas, ha iniciado una campaña de información a la opinión pública mediante un anuncio informativo sobre la cuestión en la televisión.

17. Aplicación de la legislación

Según datos del Ministerio de Justicia, desde la fecha de entrada en vigor de la Ley No. 3064/2002 (15 de febrero de 2002) hasta julio de 2006, se reunieron los siguientes datos estadísticos ilustrativos procedentes de los tribunales locales de Grecia:

- Se incoaron 293 causas en los tribunales de Grecia;
 - Se dictaron 268 sentencias judiciales.
- De las anteriores sentencias judiciales:
- En 260 se condenó a 356 delincuentes de un total de 414 encausados;
 - En ocho se absolvió a todos los encausados (12 personas);

- En dos ocasiones, el tribunal archivó la causa;
- En 23 causas se sobreseyeron definitivamente los procedimientos penales para todos los encausados (27 personas).

Por último, según los mismos datos, se han iniciado 523 procedimientos penales desde la entrada en vigor de la Ley No. 3064/2002 (15 de febrero de 2002) hasta la fecha.

18. Base de datos nacionales: datos estadísticos

Por decisión del comité de elaboración de legislación del Ministerio de Justicia, se ha creado en el Ministerio de Orden Público una base de datos nacionales que recibe datos estadísticos de todos los ministerios competentes para dar una imagen integral a fin de vigilar la trata y las fases de protección y asistencia a las víctimas. Esta base de datos se ha activado.

A continuación se especifica la información más reciente puesta a disposición por cada ministerio.

Ministerio de Orden Público

En 2005, los servicios de la Policía de Grecia gestionaron 60 casos de trata de personas (59 de explotación sexual y financiera y uno de explotación laboral), 17 de los cuales fueron cometidos por organizaciones delictivas. Tras las investigaciones y los interrogatorios correspondientes, se presentaron cargos contra 202 personas de origen griego y extranjero. Hubo 137 víctimas (entre hombres, mujeres y menores) de explotación financiera y sexual (véase el anexo 1). Las dependencias de asistencia y protección del Estado y organizaciones no gubernamentales prestaron asistencia y facilitaron protección a 57 víctimas (véase el anexo 2). El fiscal competente emitió una orden de suspensión de la deportación de 20 víctimas, de conformidad con el artículo 12 de la Ley No. 3064/2002.

Los servicios de la policía cooperaron de la siguiente forma:

- Con autoridades diplomáticas extranjeras en nuestro país (embajadas y consulados) en 33 casos, en cuestiones relativas a la asistencia a las víctimas nacionales de los respectivos países;
- Con la Organización Internacional para las Migraciones en 12 casos, en cuestiones relativas a la repatriación de las víctimas en condiciones de seguridad;
- Con los servicios y las dependencias que facilitan protección y asistencia (AGIA VARVARA), así como con organizaciones no gubernamentales (EKKYTHKA, ALLILEGII, KLIMAKA y la Sección Griega de la Red Europea de Mujeres) mediante la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros y la Secretaría General para la Salud y la Solidaridad Social (EKKA) en 19 casos;

Cabe señalar que la mayoría de las víctimas residen de manera legal en nuestro país y que, como resultado, han declarado a los servicios competentes que no desean la protección del Estado y ya han vuelto a sus países de origen, mientras que sólo una cantidad reducida permanece en Grecia.

Ministerio de Interior, Administración Pública y Descentralización

En 2004, las Oficinas de Extranjería e Inmigración competentes de las regiones del país otorgaron 22 permisos de residencia a víctimas de la trata de personas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 44 de la Ley No. 2910/2001, en su forma enmendada por el párrafo 7 del artículo 34 de la Ley No. 3274/2004. En 2005 se otorgaron 29 permisos de residencia.

En el período transcurrido entre el 1º de enero y el 1º de septiembre de 2006, la Dirección de Extranjería e Inmigración expidió un total de 35 permisos de residencia a víctimas de la trata de personas (21 renovaciones y 14 permisos iniciales), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 a 52 de la Ley No. 3386/2005.

Ministerio de Salud y Solidaridad Social; Centro Nacional de Solidaridad Social (EKKA)

Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005, se alojaron en albergues del EKKA 18 víctimas de la trata y otras 44 fueron remitidas a albergues de organizaciones no gubernamentales o fueron repatriadas. En total, los servicios del EKKA gestionaron 62 casos de víctimas de la trata de personas en ese período de tiempo.

Empleo

19. Hasta hace poco, la legislación griega no obligaba explícitamente a las empresas a proporcionar datos sobre las licencias otorgadas para facilitar que los empleados atendieran a sus obligaciones familiares. Por tanto, la Inspección de Trabajo no pudo recopilar los citados datos, ni el Departamento de Igualdad del Ministerio de Trabajo pudo obtenerlos ni proceder a su tratamiento.

Sin embargo, la reciente promulgación por el Parlamento de la Ley No. 3488/2006, sobre la aplicación de la igualdad de trato entre el hombre y la mujer en lo relativo al acceso al empleo, la formación profesional y el desarrollo de la carrera, las condiciones laborales y otras disposiciones pertinentes, constituye una base jurídica apropiada (artículo 11) para la cooperación entre los agentes y mecanismos competentes con objeto de permitir la recopilación de esos datos.

20. El proyecto de ley sobre el Estatuto del Personal de la Administración Pública, cuya elaboración ha finalizado la comisión competente (se espera que el Parlamento lo apruebe a finales de 2006) establece, entre otras, las siguientes medidas relacionadas con la legislación:

- El derecho a la licencia para el cuidado de los hijos para el padre que sea funcionario público, siempre que la madre no haga uso de esa licencia. En concreto, se refiere al derecho a llegar más tarde o a salir más temprano del trabajo sin reducción en el sueldo, o bien a una licencia remunerada de nueve meses para la atención del menor. El mismo derecho se reconoce en los casos de familias monoparentales;
- Tras el nacimiento del tercer hijo o siguientes, se establece una licencia remunerada de tres meses para el funcionario, que será contabilizada dentro de la licencia total no remunerada a que se tiene derecho para la atención de un hijo menor de 6 años;

- Los tres primeros meses de la licencia para el cuidado de los hijos son remunerados en caso de que el funcionario tenga más de tres hijos. Para cada niño nacido después del tercero, la licencia aumentará en dos meses;
- En caso de nacimiento de un cuarto niño, se prorrogará el uso de la jornada laboral reducida (llegar más tarde o salir más temprano del trabajo) durante dos años más;
- También se establecen condiciones favorables en el caso de madres que adopten niños, para asistir en su transición a la nueva vida familiar.

21. En lo que respecta al derecho del padre, cuando es un funcionario público, a la licencia para el cuidado de los hijos (jornada laboral reducida), véase la pregunta 20 *supra*. En el sector privado, dicha licencia también se puede otorgar al padre, siempre que la madre no haga uso de ella, si es empleada (artículo 9 del Convenio Laboral Colectivo Nacional [EGSSE] de 1993; artículo 6 del Convenio Laboral Colectivo Nacional [EGSSE] de 2002-2003; artículos 8 y 9 del Convenio Laboral Colectivo Nacional General [EGSSE] de 2004-2005).

Aparte de la licencia para el cuidado de los hijos (jornada laboral reducida), también se ha establecido el derecho a una licencia no remunerada (ausencia total del puesto de trabajo) por cuidado de los hijos para empleados de los sectores público y privado de ambos sexos (las condiciones de la licencia difieren según si el beneficiario trabaja en el sector público o el privado).

22. La Ley No. 3174/2003 fue derogada y quedó sustituida por la Ley No. 3250/2004. El empleo a jornada parcial en la administración pública, en entidades jurídicas de derecho público y en organizaciones gubernamentales locales está regulado ahora por lo dispuesto en la Ley No. 3250/2004. Según el párrafo 1 del artículo 4 de esa ley, el porcentaje de mujeres contratadas a jornada parcial pertenecientes a tres de los seis grupos sociales de desempleados debe ser del 60%, con la condición de que éstas hayan expresado su interés presentando una solicitud a tal efecto. Además, un cuarto grupo (madres con hijos menores de edad), por definición, está compuesto exclusivamente por mujeres.

El análisis de la aplicación de la ley muestra que el 73% de los puestos a tiempo parcial en el sector público están ocupados por mujeres, según los datos que figuran en el siguiente cuadro:

<i>Grupo</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Mujeres por grupo social (porcentaje)</i>
A	659	1 439	68,59
B	278	454	62,02
C	597	1 505	71,60
D	0	1 984	100
E	326	211	39,29
F	447	645	59,07
Mujeres contratadas: 73%			

En lo que respecta a la promoción de la ley, la Dirección competente del Ministerio de Interior, Administración Pública y Descentralización ha informado de

inmediato a las organizaciones de los grados A y B de los gobiernos locales bajo su supervisión sobre lo dispuesto en la Ley No. 3250/2004, por medio de las Oficinas regionales, publicando además las circulares pertinentes en el sitio web del Ministerio para información de la población. Además, en el contexto de la publicidad y la transparencia, las ofertas de empleo para personal a jornada parcial se publican en el sitio web del Consejo Supremo para la Contratación de Personal (entidad independiente competente para la contratación en el sector público).

23. En los últimos años se ha registrado un descenso constante de la tasa de desempleo. Entre 2001 y 2005, el desempleo femenino se ha reducido del 16,2% al 15,3%. En el cuadro siguiente se presenta la evolución de las tasas de desempleo en Grecia en el período 2001-2005, según datos de Eurostat.

**Tasas de desempleo desglosadas por sexo en Grecia
(población de 15 años o más)**

(Porcentaje)

	<i>Total</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>
2001	10,8	7,3	16,2
2002	10,3	6,8	15,6
2003	9,7	6,2	15,0
2004	10,5	6,6	16,2
2005	9,8	6,1	15,3

Fuente: Eurostat.

Además, según datos del Servicio Nacional de Estadística, durante el primer trimestre de 2006 la tasa de desempleo femenino descendió hasta el 14,6%.

En lo que respecta al empleo femenino, se ha observado un aumento del 41,7% en 2000 al 46,1% en 2005 (datos de Eurostat). El 88,1% de las mujeres empleadas trabajan a jornada completa. En el Programa nacional de reforma 2005-2008 presentado por Grecia a la Unión Europea en el contexto del estudio de la aplicación de la Estrategia de Lisboa, se asumió el compromiso de aumentar el porcentaje de empleo femenino hasta el 51%.

El Ministerio de Empleo, en cooperación con la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros y otros ministerios, los interlocutores sociales, los gobiernos locales y otros organismos competentes, ha centrado sus medidas en el refuerzo del empleo femenino. Con este fin, se está poniendo en marcha una intervención integrada destinada a aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral de Grecia, que incluye lo siguiente: a) medidas legislativas y de otro tipo para la promoción del empleo y b) medidas para complementar los ingresos de los desempleados, como un incremento de la prestación normal por desempleo hasta el 55% del salario mínimo diario.

En particular, cabe señalar lo siguiente:

- La Ley No. 3488/2006 sobre la aplicación de la igualdad de trato entre el hombre y la mujer en lo relativo al acceso al empleo, la formación profesional y el desarrollo de la carrera, las condiciones laborales y otras disposiciones pertinentes, promulgada recientemente por el Parlamento;

- El artículo 7, sobre apoyo a la familia y refuerzo del empleo femenino, del Convenio Laboral Colectivo Nacional de 2006 y 2007 establece la promoción de una norma legislativa relativa al pago, con cargo al Fondo distributivo de prestaciones familiares para empleados, de un salario diario equivalente al de los trabajadores no cualificados a los empleados de ambos sexos que estén en licencia no remunerada para cuidar de los hijos (ausencia del puesto de trabajo, véase la pregunta 21), con inclusión de las aportaciones a las organizaciones de seguro social pertinentes;
- Ejecución de programas especiales para mujeres desempleadas, cuya participación se promueve aumentando los incentivos. El 60% de los participantes en la mayoría de los programas son mujeres, y este porcentaje aumenta en algunos de ellos, como los relativos al establecimiento de actividades independientes (autónomos). En 2005 y el primer trimestre de 2006, 35.000 mujeres se beneficiaron del conjunto de los programas nacionales;
- Concretamente, la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros ha puesto en marcha un programa especial de intervención integrada en favor de la mujer que combina servicios de asesoramiento con la adquisición de experiencia laboral mediante la selección para puestos de trabajo o el lanzamiento de una actividad independiente (profesiones liberales, trabajo autónomo) (véanse también las preguntas 2 y 29). Se han beneficiado de este proyecto un total de 9.018 mujeres, desempleadas en su mayoría, de todas las edades. En cooperación con la Estatal de Empleo (OAED), se ha fomentado de inmediato el empleo de 5.342 mujeres desempleadas, con un gasto de 30 millones de euros, mediante la creación de 2.074 nuevos puestos destinados a ellas, la concesión de subsidios a 2.074 nuevas trabajadoras autónomas y la facilitación de experiencia laboral a 1.194 mujeres desempleadas. Cabe señalar que, en 2006, el presupuesto del programa ha aumentado en 6 millones de euros que se dedicarán a la concesión de subsidios, por medio de la OAED, a otras 666 desempleadas que constituirán sus propias empresas;
- La firma, tras una fase de consulta social, de un Memorando de cooperación entre la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, las asociaciones patronales más representativas (la Federación de Industrias Griegas, la Confederación Nacional de Comercio, la Confederación General de Profesionales, Comerciantes y Proveedores de Grecia y la Cámara de Comercio e Industria de Atenas) y la Red Helénica para la Responsabilidad Social de las Empresas a fin de facilitar la participación de la mujer en el empleo y la igualdad de oportunidades para su adelanto en el entorno laboral (2 de julio de 2006);
- El refuerzo de las estructuras y los servicios de atención social (jardines de infancia, centros para la ocupación creativa de los niños, etc.), para apoyar la integración de la mujer en el mundo laboral. Concretamente, cabe señalar lo siguiente:
 - a) En la actualidad hay 396 centros que cuentan con 1.972 empleados y tienen capacidad para 53.943 niños. Además, en el plano regional, existen 1.120 centros que cuentan con 4.400 empleados y tienen capacidad para 49.056 niños;

b) Los Ministerios de Interior y de Empleo están colaborando en un nuevo marco institucional para la promoción de la empleabilidad de la mujer mediante nuevos métodos para apoyar la conciliación del trabajo con la vida familiar. La citada labor se refiere a la utilización de las estructuras existentes y estará terminada a principios de 2007;

c) La Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros aplica, por primera vez en Grecia, un Programa de medidas positivas en favor de la mujer en pequeñas, medianas y grandes empresas (véase la pregunta 2). En el contexto de ese programa, se ofrece a las empresas incentivos económicos para la educación y capacitación continuas de mujeres, que abarcan los costes operacionales de jardines de infancia, la promoción del teletrabajo, la información y sensibilización de todos los empleados y la ampliación de los sistemas de certificación de la calidad (ISO). Se prevé que varios miles de mujeres se beneficiarán del proyecto, que cuenta con un presupuesto total de aproximadamente 16.865.000 euros. La primera etapa del programa, con un presupuesto total de unos 2,6 millones de euros, ya se ha ejecutado con la participación de 20 empresas. Hace poco terminó el proceso de presentación de propuestas para la segunda etapa, con un presupuesto total de unos 14,3 millones de euros. En julio de 2006, 200 empresas de todo el país expresaron su interés por participar en la segunda etapa del programa.

24. Según datos de Eurostat, la diferencia salarial por género en Grecia era del 10% en 2005. Se han tomado las siguientes medidas para reducir esas diferencias salariales:

a) Firma de un Protocolo de cooperación entre la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros, las principales asociaciones patronales (la Federación de Industrias Griegas, la Confederación Nacional de Comercio, la Confederación General de Profesionales, Comerciantes y Proveedores de Grecia y la Cámara de Comercio e Industria de Atenas) y la Red Helénica para la Responsabilidad Social de las Empresas (2 de junio de 2006). El Protocolo tiene el objetivo de sensibilizar y motivar a las empresas para que garanticen la igualdad de oportunidades profesionales a mujeres y hombres con medidas destinadas a fomentar, entre otras cosas, la igualdad salarial;

b) Firma de un Memorando de cooperación con la Red Helénica para la Responsabilidad Social de las Empresas (22 de febrero de 2006) para continuar fomentando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas pertenecientes a la Red en el marco de la cooperación entre ambos órganos. Con esta iniciativa, los dos órganos pretenden reducir la discriminación a la que siguen enfrentándose las mujeres en el entorno laboral (desigualdades salariales por trabajo de igual valor, perspectivas de carrera y de adelanto sometidas a segregación profesional, capacitación deficiente, etc.);

c) Ejecución del programa *Equal Pay – Mind the Gap* (del 1º de enero de 2002 al 31 de marzo de 2003) por el Centro de Investigación para la Igualdad entre los Géneros (KETHI), en el contexto del Quinto programa de acción comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de la Comisión Europea, con el objetivo de eliminar la diferencia salarial entre hombres y mujeres por medio de la información, la sensibilización y la educación de las mujeres, los interlocutores y agentes sociales y los profesionales. Para dar publicidad a las conclusiones del citado programa, el Centro de Investigación

organizó una conferencia general con el título *Equal Pay – Mind the Gap* (del 30 de enero al 1º de febrero de 2003);

d) Tras el programa antes mencionado, la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros elaboró la Guía de la política de motivación de las empresas para la integración de la igualdad entre los géneros (2005), que presenta un paquete de incentivos para la promoción de medidas positivas sobre la igualdad entre los géneros en las empresas y que incluye, por ejemplo, las siguientes medidas:

- Apoyo a programas destinados a diseñar y ejecutar planes de acción (investigación sobre salarios, técnicas para conocer y evaluar sistemas de remuneración) para luchar contra la desigualdad salarial en el plano empresarial;
- Financiación de estudios destinados a realizar análisis más detallados sobre la cuestión;
- Creación de un Observatorio que registre y estudie la evolución de los salarios por sexo;
- Elaboración de un Código de buenas prácticas para las empresas y asociados;
- Promoción entre las empresas del cumplimiento de la normativa establecida en los Convenios Laborales Colectivos en lo relativo a la implantación de prácticas de pago no discriminatorias;

La Guía se publicó en formato electrónico en el sitio web de la Alianza para el Desarrollo “Equal – Andromeda” hace aproximadamente un año.

Atención de la salud

25. El objetivo del Ministerio de Sanidad y Solidaridad Social (y, específicamente, de la Dirección de Atención Básica de la Salud) sigue siendo desarrollar una red de planificación familiar. Existen dos Centros de Educación para la Planificación Familiar en Atenas (hospital Alexandra) y en Salónica (hospital Ippokrateio) para educar al personal que presta los servicios correspondientes en los centros de salud. En las localidades que no disponen de centro de planificación familiar, estos servicios se prestan en las consultas obstétricas y ginecológicas de los hospitales públicos. Las mujeres de Grecia no utilizan mucho los servicios de planificación familiar, ya que acuden a clínicas y ginecólogos privados contratados mediante agencias de seguros, que cubren los gastos.

26. El programa intergubernamental europeo de la Red mediterránea de mujeres infectadas por el VIH terminó en octubre de 2003. Grecia participó como asociado por medio del Centro Helénico para el Control de las Enfermedades Infecciosas y la Prevención de Enfermedades (KEELPNO) y, más concretamente, del Centro de asesoramiento y línea telefónica sobre el SIDA, con sede en el hospital A. Syngros.

Los objetivos del programa ya se han mencionado en el sexto informe anual de Grecia y por motivos de brevedad no se incluirán en el presente documento. Para cumplir los citados objetivos, se aplicaron las siguientes medidas:

- Educación: capacitación del personal científico del Centro de asesoramiento y línea telefónica para que comprendan plenamente los problemas relativos a la información médica y a las particularidades de la infección por el VIH y las

enfermedades de transmisión sexual entre la población femenina, además de las implicaciones psicológicas del problema;

- Archivos, bibliografía: recopilación o catalogación de artículos y libros pertinentes en griego;
- Lista de organismos: una vez elaborado un cuestionario especial, se creó un catálogo de organismos que prestan servicios a personas seropositivas, mujeres incluidas, con objeto de establecer vínculos entre ellos;
- Publicación de una revista: se han publicado cuatro números de la revista de la Red mediterránea, con artículos de participantes en esa red, que se distribuyeron a unos 200 organismos en Grecia;
- Anuncios, discursos: se han tratado estas cuestiones en conferencias y otras reuniones científicas, así como en programas de capacitación para empleados del sector de la salud (mental);
- Relaciones, grupos de trabajo interdisciplinarios: se han celebrado dos ciclos de reuniones del grupo interdisciplinario con los siguientes temas:
 - a) Mujer: poblaciones migrantes e infección por el VIH
 - b) Maternidad e infección por el VIH

Las reuniones dieron como resultado propuestas y recomendaciones dirigidas a la Unión Europea.

- Encuesta en relación con las líneas telefónicas

Tras la elaboración de un cuestionario común para los usuarios de las líneas telefónicas de los operadores participantes en la red, cada país hizo una encuesta a una muestra de mujeres que habían llamado a la línea telefónica nacional acerca de su nivel de información y sus necesidades en cuestiones relacionadas con la infección por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

En la segunda etapa del programa (octubre de 2001 a octubre de 2003), se aplicaron las siguientes medidas:

- Difusión de la red, anuncios, discursos

Se presentaron cuestiones relacionadas con el programa en conferencias y otras reuniones científicas, así como en programas de capacitación para empleados en el sector de la salud (mental).

Cabe destacar en particular la cooperación en la conferencia de una jornada organizada por el Departamento de Sociología de la Escuela Nacional de Salud Pública, que incluyó una presentación de los programas de la Red mediterránea de mujeres y de PHASE. Además, se ha elaborado un folleto especial para la presentación de la Red mediterránea de mujeres.

- Publicación de una revista

Se han publicado dos números de una revista de la Red mediterránea de mujeres con artículos de las participantes en la red, y un tercero está en fase de publicación.

- Encuesta entre médicos

Después de elaborar un cuestionario común para los participantes de la Red, cada país llevó a cabo una encuesta entre médicos (generalistas y ginecólogos) sobre la prevención de la infección por el VIH y las enfermedades de transmisión sexual entre la población femenina.

- Encuesta en relación con las líneas telefónicas

Después de adaptar el cuestionario, cada país repitió la encuesta a una muestra de mujeres que habían llamado a las líneas telefónicas participantes en la red, con objeto de elaborar un estudio comparativo de los resultados de la primera etapa.

- Relaciones, grupos de trabajo interdisciplinarios

Las dos etapas han continuado con reuniones sobre los siguientes temas:

- a) Mujer: poblaciones migrantes e infección por el VIH;
- b) Maternidad e infección por el VIH.

- Reuniones nacionales y cursos de capacitación: se han celebrado los siguientes:

- a) En un ciclo de seminarios organizado por el Centro Helénico para el Control de las Enfermedades Infecciosas y la Prevención de Enfermedades (KEELPNO) y dirigido a enfermeros de hospitales de todo el país, el Centro de asesoramiento y línea telefónica sobre el SIDA participó con ponencias sobre las cuestiones tratadas por la Red mediterránea de mujeres;

- b) El Centro de asesoramiento y línea telefónica sobre el SIDA ha organizado una conferencia de una jornada sobre la sexualidad de la mujer y el trauma psicológico, destinada a los profesionales de la intervención psicosocial y de la salud mental.

Como conclusión, tanto la realidad epidemiológica como la experiencia de los profesionales de la salud mental y las ciencias sociales que trabajan en el sector de la prevención y el apoyo a seropositivos confirmaron la necesidad de medidas centradas en la población femenina (y en los problemas de la transmisión principalmente por vía heterosexual del virus). La cooperación en el plano europeo permitió el intercambio de conocimientos técnicos y de opiniones sobre las necesidades y las condiciones de todos los países, así como la realización de estudios comparativos.

En el plano nacional, la red amplió la experiencia del personal científico del Centro de asesoramiento y línea telefónica, creando así la oportunidad de aplicar un criterio sistemático a los problemas a los que se enfrenta la población femenina en relación con la infección por el VIH.

Mujeres pertenecientes a minorías

27. En 2002, Grecia aprobó y comenzó a ejecutar un Plan de acción para la integración social de la población romaní griega, que pertenece al Plan de acción nacional para la integración social de los grupos de población vulnerables.

La población romaní forma parte intrínseca de la población de Grecia, sus integrantes son ciudadanos griegos y están sujetos a la Constitución y a la

legislación del Estado. Además, el Estado, teniendo en cuenta sus condiciones particulares de vida, los reconoce como un grupo de población socialmente vulnerable y adopta medidas positivas en su beneficio.

El Plan de acción integrado está organizado en dos ejes prioritarios: primero, estructuras: vivienda para la población romaní, y segundo, servicios: prestación de servicios en los sectores de educación, salud, empleo, cultura y deportes, con especial atención a las regiones donde se producen intervenciones organizadas en cuestión de vivienda según el plan antes citado. En el anexo 4 se ofrecen datos detallados de ambos ejes.

El Ministerio de Interior, Administración Pública y Descentralización ha otorgado especial importancia a resolver el problema de la vivienda entre la población romaní, dado que la mejora de sus condiciones de vida constituye un requisito básico para su empoderamiento, al tener la consecuencia positiva de eliminar su exclusión en todos los ámbitos de la vida social. La creación de unas condiciones de vida adecuadas, aplicando medidas al respecto, contribuye a mejorar la condición de las mujeres romaníes en la sociedad griega contemporánea (protección de la maternidad, acceso a la educación, etc.), ayudándoles a cumplir las condiciones previas para la integración social.

Además, en el contexto del funcionamiento de los centros y las dependencias móviles de asistencia médica y social (segundo eje prioritario, servicios: sector de la salud), las mujeres romaníes se pueden beneficiar de servicios de planificación familiar, así como de atención médica primaria, exámenes preventivos (Papanicolau o citología vaginal) y servicios de apoyo psicológico.

En lo que respecta a la educación, como ya se ha mencionado (véase la pregunta 9), las mujeres romaníes constituyen un grupo objetivo diferenciado en los programas de educación elaborados en los Centros de Educación de Adultos que reciben el apoyo del Instituto de Educación de Adultos (IDEKE) de la Secretaría General para la Educación de Adultos (GGEE). Además, ese Instituto promueve el programa autónomo de apoyo educativo y de asesoramiento a familias romaníes, musulmanas, repatriadas e inmigrantes. Ese programa, uno de cuyos grupos destinatarios son las mujeres y los padres romaníes de ambos sexos, procura lograr la integración sin problemas en el sistema educativo de Grecia de varios grupos de estudiantes con particularidades lingüísticas, culturales o religiosas (en este caso, los niños romaníes), además de la prevención del fracaso y el abandono escolar. Se espera que las madres romaníes en su calidad de beneficiarias del programa en cuestión, adquieran conocimientos lingüísticos básicos, aprendan a conocer mejor la civilización griega y obtengan la cualificación adecuada de manera que puedan ayudar a sus hijos (niños y niñas) en sus estudios y su desarrollo social general.

28. El primer estudio, “Las mujeres musulmanas: estudio de sus necesidades y formulación de propuestas”, presenta datos sociodemográficos y sobre las condiciones de vida de las mujeres musulmanas. En él se incluye información sobre la situación laboral del grupo destinatario y se analizan las estructuras familiares y el perfil educativo de las mujeres musulmanas, junto con datos sobre las características culturales correspondientes a su identidad religiosa. Basándose en esa información, el estudio describe la vida y la cultura de las mujeres musulmanas y registra las medidas iniciadas por el Estado de Grecia para facilitar y mejorar su calidad de vida, relativas principalmente a los siguientes ámbitos: a) educación y formación profesional para mejorar la condición educativa y profesional de las

mujeres musulmanas, b) asesoramiento psicológico y jurídico sobre cuestiones laborales, así como de salud y planificación familiar, c) conocimiento de la cultura de las mujeres musulmanas y d) fomento del espíritu empresarial de la mujer, mediante el impulso de programas agroturísticos en las zonas donde viven las mujeres musulmanas.

En el segundo estudio, “Las relaciones jurídicas familiares de los musulmanes griegos”, se indica que los miembros de la comunidad musulmana tienen libertad para remitir sus cuestiones familiares bien a los muftíes locales o bien a los tribunales civiles. En caso de que elijan a los primeros, se aplicará la sharia (ley islámica) en la medida en que no entre en conflicto con el orden constitucional de Grecia. De conformidad con la Ley No. 1920/1991, los tribunales no aplicarán las decisiones de los muftíes que sean contrarias a la Constitución de Grecia, por lo que la poligamia, el matrimonio de menores y el matrimonio por poderes no están permitidos.

Además, el informe afirma que la interpretación de la Ley No. 1920/1991 debe ser estricta en el sentido de que la opción de acudir a los muftíes locales o a los tribunales civiles está reservada exclusivamente a los miembros de la minoría musulmana de Tracia según el Tratado de Paz de Atenas (1913) y el Tratado de Lausana (1923). Así, será aplicable a la población musulmana que vive en el resto del país (incluidas las mujeres), la legislación civil general de Grecia.

Todos los estudios elaborados por el Centro de Investigación para la Igualdad entre los Géneros (KETHI), incluidos los ya citados, son independientes y sus conclusiones se pueden tener en consideración como información general para la elaboración de políticas públicas en distintos ámbitos de actividad.

Las mujeres musulmanas son beneficiarias de diversos programas que abordan la cuestión del empleo y la educación de la comunidad musulmana. La tercera fase del programa sobre la educación de los musulmanes ofrece oportunidades educativas destinadas a mejorar los resultados escolares de los alumnos pertenecientes a ese grupo. Se han elaborado nuevos libros originales sobre distintos temas, incluida la gramática del griego, para facilitar su avance. En el contexto de ese proyecto, se han comenzado a aplicar nuevas políticas destinadas a evitar el abandono escolar y fomentar la integración de los alumnos en las instituciones griegas. Los Centros de apoyo para la educación de los estudiantes musulmanes ofrecen información sistemática y lecciones de griego para los padres, asesoramiento para los profesores, introducción a nuevas tecnologías para los alumnos y organización de actividades sociales. Además, 38 mujeres musulmanas de la región de Macedonia Oriental y Tracia participan en el proyecto “Intervenciones integradas en favor de la mujer” destinado a mejorar la situación laboral de la mujer mediante actividades de asesoramiento, capacitación y fomento del espíritu empresarial, entre otras cosas. (véanse más detalles en la respuesta a la pregunta 2).

Protocolo Facultativo

29. La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por el Parlamento de Grecia tuvo lugar en octubre de 2001 y, desde entonces, el Protocolo es una Ley del Estado (Ley No. 2952 de 22 de octubre de 2001). Todos los ciudadanos pueden consultar el texto íntegro de esa ley en el sitio web de la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros (www.isotita.gr).

Inmediatamente después de la ratificación, la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros difundió la información mediante comunicados de prensa dirigidos a todos los organismos del Estado, los medios de comunicación, los agentes sociales, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de mujeres.

Además, todas las conferencias y reuniones organizadas por la Secretaría General para la Igualdad entre los Géneros incluyen referencias al contenido del Protocolo Facultativo y a la posibilidad que tienen las personas o los grupos de personas que se consideran víctimas de una violación de sus derechos y libertades fundamentales por parte del Estado de presentar una comunicación al respecto al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

* Los anexos se presentarán al Comité en los idiomas en que se recibieron.
